

Soberanía alimentaria y formas alternativas de producción: una aproximación a los movimientos sociales rurales en tiempos de pandemia. El caso de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT)

Autoras:

María Eugenia Díaz (CCC / FSOC, UBA)

Laura Luna Dobruskin (CCC / FCE, UBA)

Resumen

La pandemia del COVID-19 ha planteado un nuevo escenario para el conjunto de la sociedad, en el que las formas de relacionarse, consumir y socializar se han visto fuertemente modificadas. Al igual que en otras situaciones de crisis, las organizaciones de la economía social y solidaria han asumido un rol central para dar respuesta a las necesidades básicas de la comunidad. En este sentido, los movimientos sociales rurales abrazan el concepto de soberanía alimentaria como una alternativa al modelo neoliberal que perpetúa un comercio internacional injusto e incapaz de solucionar el problema del hambre en el mundo.

La ponencia tiene por objetivo indagar en las transformaciones acaecidas en las formas de producción y comercialización de los movimientos sociales rurales en las últimas décadas en Argentina, las cuales se vieron acentuadas durante la pandemia. Para ello se tendrá en cuenta los procesos de territorialización de estos movimientos, la demanda por una ley de tierras y la instalación de la soberanía alimentaria como estandarte de un modelo alternativo de producción. Para dar cuenta de ello, se tomará como caso emblemático las prácticas y repertorios de acción desplegados por la organización de pequeños productores Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), con foco en el período marzo-diciembre de 2020.

La metodología empleada para llevar adelante el estudio es de carácter cualitativo. Para el cumplimiento de los objetivos se procederá a la revisión de fuentes secundarias de información, entre las que se hallan investigaciones académicas, artículos periodísticos, y proyectos de ley.

Palabras claves: soberanía alimentaria- pandemia- movimientos sociales- UTT

1) Introducción

En la última década se ha abierto el debate en el escenario público en torno al origen, la producción y el consumo de alimentos. A partir de 2008, el contexto de crisis de los mercados

internacionales y, fundamentalmente, el conflicto con “el campo” en Argentina, permitieron pensar acerca de los diversos modelos de producción y de hacer de la agricultura, visibilizándose la importancia del reconocimiento de los pueblos originarios y los "agricultores familiares" como actores fundamentales en el proceso. La problematización de estos aspectos se vio acompañada por la multiplicación de los espacios de intercambio y discusión (tanto organizacionales como académicos y estatales) en torno a las cadenas de costos y las formas de producción.

La agroecología como paradigma, en asociación con la economía social y solidaria como propuesta y estrategia comercial y social alternativa, resulta una combinación virtuosa en materia alimentaria. En este sentido, los movimientos rurales sociales abrazan el concepto de soberanía alimentaria como una alternativa al modelo neoliberal que perpetúa un comercio internacional injusto e incapaz de solucionar el problema de alimentos en el mundo. En su lugar, los esfuerzos deben enfocarse en la autonomía local, los mercados locales, los ciclos locales de producción-consumo, la soberanía energética y tecnológica, y las redes de agricultor a agricultor.

La cuestión de la soberanía alimentaria como eje organizador de los repertorios de acción de estas organizaciones, asume un papel central, puesto que en ella confluyen las distintas concepciones y demandas que inspiran la lucha de estos movimientos (acceso a la tierra, acceso a semillas, acceso al agua, reforma agraria, preservación del medio ambiente, instauración de modelos de producción agroecológicos, entre otros).

La pandemia del COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, ha planteado un nuevo escenario para el conjunto de la sociedad. Las formas de relacionarse, consumir y socializar se han visto fuertemente modificadas. Muchos objetos de estudio de las ciencias sociales se han visto afectados por este fenómeno lo que ha llevado a replantear objetivos de investigación para poder captar y analizar los impactos que la pandemia ha generado -y continúa generando- en la sociedad.

Si hasta el año 2019 la Argentina se encontraba atravesando una de las peores crisis económicas de su historia, el COVID-19 acrecentó los efectos de dicha situación. En ese momento, al igual que en otros contextos de emergencia, las organizaciones sociales de la economía social y solidaria pasaron a adoptar un lugar fundamental, en tanto actores con capacidad de dar respuesta a una parte de las necesidades básicas de la comunidad.

Según estudios del Centro Cultura de la Cooperación, durante los primeros meses del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en la zona del AMBA, la demanda de productos provenientes de estas redes cooperativas se incrementó entre un 60% y un 70%.

Este crecimiento amerita indagar en las causas que condicionan este fenómeno, así como en la transformación de las pautas de provisión de alimentos por parte de la sociedad, atendiendo a las particularidades de distintos grupos y sectores.

La ponencia tiene por objetivo indagar en las transformaciones acaecidas en las formas de producción y comercialización de los movimientos sociales rurales en las últimas décadas en Argentina, las cuales se vieron acentuadas durante la pandemia. Para ello se tendrá en cuenta los procesos de territorialización de estos movimientos, la demanda por una ley de tierras y la instalación de la soberanía alimentaria como estandarte de un modelo alternativo de producción. Para dar cuenta de ello, se tomará como caso emblemático las prácticas y repertorios de acción desplegados por la organización de pequeños productores Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), con foco en el período marzo-diciembre de 2020.

En este sentido, este estudio se propone aportar elementos para la comprensión de fenómenos sociales ligados a la organización y acción colectiva emprendida por actores del mundo agrario, cuyos antecedentes históricos permiten comprender la vigencia y emergencia de nuevos movimientos sociales rurales en la actualidad. La ponencia se propone entonces, poner en debate la cuestión de la soberanía alimentaria a fin de aportar elementos para la comprensión de diversas problemáticas sociales cuyo germen/raíz abreva en los modelos de producción que históricamente han hegemonizado el campo argentino y latinoamericano.

La metodología empleada para llevar adelante la ponencia es de carácter cualitativo. Para el cumplimiento de los objetivos se procederá a la revisión de fuentes secundarias de información, entre las que se hallan investigaciones académicas, proyectos de ley, y entrevistas y artículos periodísticos publicados en distintos medios de comunicación de alcance nacional. Asimismo, se realizaron 3 entrevistas semiestructuradas a actores clave de la economía social ligados a la producción agraria en pequeña escala así como a la matriz agroecológica. Las personas entrevistadas, integrantes y referentes de la unión de trabajadores de la tierra (UTT), conforman la primera escala de un conjunto de entrevistas planificadas para la segunda mitad de 2021, en base a la técnica muestral bola de nieve.

2) Resistencias y movimientos sociales en el sector agrario argentino y latinoamericano

Las dos primeras décadas del siglo XXI han supuesto para América Latina, y en particular para el caso de Argentina, el desarrollo de grandes movilizaciones sociales de carácter sociopolítico. Se podría decir que el siglo se ha iniciado con una reivindicación de la política

en la calle. A través de esta modalidad de acción colectiva se han expresado diversas reivindicaciones y demandas, se ha puesto en jaque a gobiernos y regímenes políticos y se han instalado temas y problemas en la mira de la agenda de la política pública y social. Movimientos “indígenas”, “piqueteros”, “feministas” o “trabajadores de la tierra” se han convertido en las últimas décadas en “actores con presencia, organización y capacidad de movilización” (Revilla Blanco, 2005: 29).

Tras la década neoliberal de los años 90, las economías latinoamericanas se vieron favorecidas por los altos precios internacionales de los productos primarios (commodities), lo que se reflejó en las balanzas comerciales y el superávit fiscal de los países. En esta coyuntura económica favorable, los gobiernos latinoamericanos -mayoritariamente de carácter popular/progresista- tendieron a sustentarse en estas ventajas comparativas del auge de los commodities, descuidando las nuevas asimetrías socioambientales aparejadas por la consolidación de un modelo de desarrollo basado en la exportación de materias primas a gran escala.

Una de las consecuencias de la actual inflexión extractivista es la explosión de conflictos socioambientales y el surgimiento de nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de lo común, la biodiversidad y el ambiente (Svampa, 2019). Este escenario aparece marcado no sólo por luchas indígenas-campesinas, sino también por el surgimiento de nuevos movimientos socioambientales, rurales y urbanos, de carácter policlasista y caracterizados por un formato asambleario. En este sentido, Zibechi (2017) plantea que resulta importante destacar el nacimiento de nuevos movimientos en casi todos los países de América Latina, a la sombra del crecimiento del extractivismo depredador.

En términos generales, la categoría de movimientos sociales refiere a aquellos “actores colectivos implicados en las demandas de reconocimiento por parte de otros actores y del sistema político, así como en las luchas políticas por la demarcación del escenario político (sus participantes e instituciones, sus programas y alcances)” (Alvarez, Dagnino y Escobar, 2001). En el caso específico de los movimientos sociales contemporáneos en América Latina, estos suman un elemento extra: su involucramiento en la producción de una concepción alternativa de ciudadanía (Revilla Blanco, 2005) porque se encuentran implicados en “la multiplicación de escenarios públicos en los cuales se pueda cuestionar y volver a dar significado a la exclusión sociocultural, de género, étnica y económica” (Álvarez, Dagnino y Escobar, 2001: 42).

En este proceso de definición de una identidad común que sustenta el ejercicio de lo colectivo, se inscriben tres órdenes que orientan la acción de los movimientos sociales: el relacionado

con los fines (el sentido que la acción tiene para el actor); el vinculado con los medios (las posibilidades y los límites de la acción), y el relacionado con el ambiente (ámbito en el que una acción tiene lugar) (Revilla Blanco, 2005).

En tanto actores significativos, los movimientos sociales interpelan a la sociedad de la que forman parte y sostienen con ella un intercambio permanente de incidencias y condicionamientos. En tal sentido, la función política de las organizaciones radica en el ejercicio de influencia en el ámbito público para poder transformar y lograr incluir demandas y propuestas en la agenda pública de los gobiernos (Bártola, 2018).

En este sentido, en toda América Latina, movimientos campesinos e indígenas vienen resistiendo el acorralamiento de sus territorios producto del avance del modelo de desarrollo basado en los “agronegocios”, promoviendo, a su vez, la defensa de sus propias culturas y modos de vida.

En el caso argentino en particular, las medidas implementadas durante los años noventa generaron fuertes transformaciones en el agro, entre las que destacan el aumento de la injerencia del capital financiero en la producción agropecuaria por medio de los pool de siembra; la adopción de nuevas tecnologías controladas por los grandes laboratorios internacionales que imponen nuevos paquetes tecnológicos basados en la biotecnología (semillas transgénicas, agrotóxicos, etc.); el aumento de la migración de trabajadores rurales hacia los centros urbanos y el crecimiento de poblaciones marginadas; una mayor orientación de la producción a la demanda externa, que desplaza los cultivos tradicionales por commodities; la consolidación de oligopolios en varios complejos agroindustriales (por ejemplo, en el complejo lácteo dos compañías controlan prácticamente la totalidad de la actividad) y en el mercado de insumos (dependencia de las semillas y del “paquete tecnológico” de Monsanto en la producción de soja y maíz); el crecimiento de la superficie necesaria para mantenerse en la actividad en términos “competitivos”; la concentración de la comercialización con el auge del “supermercado”; y una mayor concentración de la propiedad de la tierra mediante la apropiación de tierras “marginales” y la expulsión de campesinos y pequeños productores de sus tierras (Dominguez y Sabatino, 2010 en Garcia Guerreiro y Wharen, 2016).

La problemática de la tierra es uno de los factores estructurales que contribuye a explicar el surgimiento y posterior evolución de organizaciones campesinas y de la agricultura familiar en distintas regiones del país. Desde la década del 90 han emergido y se han consolidado expresiones y respuestas colectivas, de lucha gremial y defensa jurídica, dando lugar al surgimiento de movimientos como el MOCASE, el MOCAFOR, el MAM y MOCAJU, entre

otros. Estas organizaciones poseen hoy un reconocimiento y una legitimidad que trasciende las fronteras provinciales, para instalarse en el escenario nacional.

Las resistencias campesinas y de la agricultura familiar en Argentina se expresan en distintos niveles y ámbitos, así como a partir de diversos modos de acción: estrategias legales por la recuperación y/o reconocimiento de los territorios; acciones directas en reclamo de derechos (movilizaciones, establecimiento de carpas de autodefensa, cortes de ruta, etcétera); estrategias de alianza con otras organizaciones y/o actores sociales del país y a nivel continental e internacional; disputas por la definición de políticas públicas; construcción de alternativas territoriales autónomas (en las que se incluyen la educación, la salud, la producción, la comercialización, etcétera); luchas de sentido por el reconocimiento cultural (que incluye la propia identidad, los modos de producir y vivir, de organizarse, etcétera); entre otros (García Guerreiro y Wahren, 2014).

Teniendo en consideración el caso de estudio de esta investigación, la descripción de la agricultura familiar en el sector horticultor merece ser destacado. A diferencia del sector agropecuario extensivo productor de commodities, así como de otras producciones intensivas, las regiones hortícolas de Argentina se caracterizan por ser zonas de producción destinadas a proveer de verduras y hortalizas frescas (productos altamente perecederos) a los habitantes de los grandes centros urbanos, alcanzando a más de 15 millones de personas. Las unidades productivas suelen ser pequeñas, dinámicas y diversificadas en función de la demanda (Ferraris y Bravo, 2014); las formas de trabajo son familiares o son arregladas informalmente mediante salario o formas de mediería. En todos los casos prima el arriendo por sobre la propiedad de la tierra.

Si bien en este tipo de producción la organización familiar persiste a lo largo del tiempo, la misma se organiza de forma heterogénea, en función de los condicionantes económicos, socioculturales y laborales. Las formas de capitalización de los agricultores familiares en la horticultura, puede clasificarse en tres grupos (Attademo, Waisman, Rispoli y Lucero, 2013): “productores que gestionan la producción (y en ocasiones la comercialización) pero no realizan tareas productivas directas; productores familiares con capacidad para contratar mano de obra y construir invernaderos; y productores pequeños escasamente capitalizados, cuya producción depende de la mano de obra familiar (Bártola, 2018). En los tres casos mencionados, la empresa familiar dispone de “tasas de retorno inferiores a las que

consideraría aceptables” el sector de los agronegocios (Attademo, Waisman, Rispoli, Lucero: 2013; 14)¹.

En este sentido, “[...] los productores de la agricultura familiar se encuentran en la base socioeconómica del modelo hortícola” (Bártola, 2018). La baja posesión de capital económico dificulta de forma cíclica la capacidad de adaptación de los agricultores a las nuevas formas de producción, tecnificación y comercialización que rigen para el sector. Esto fuerza a las familias a maximizar la fuerza de trabajo (participación de todo el grupo familiar en la actividad productiva, ciclos laborales extensos, etc.) y generar estrategias de subsistencia por fuera de la unidad productiva. De esta forma, la economía familiar muchas veces es complementada con más de una ocupación en trabajos temporarios agrícolas o urbanos, tendientes a asegurar la reproducción de la vida.

Por unidad de superficie, el sector hortícola multiplica exponencialmente la mano de obra, insumos y bienes de capital requeridos por otro tipo de producciones. La mano de obra necesaria para llevar adelante la explotación hortícola reúne a productores, peones, medieros, jornaleros, changarines y embaladores, lo que garantiza una alta demanda de trabajadores y la movilidad del mercado de trabajo a nivel local y regional (cinturón verde) (Ferraris y Bravo, 2014). Tal característica, sumada a la distribución espacial de las unidades de producción y a la temporalidad de la misma, contraviene el principio de la desterritorialización que caracteriza a otros sectores de la economía agraria. La dinámica de trabajo posibilita los espacios de reunión y encuentro que promueven la construcción de redes colaborativas y los procesos organizativos.

3) Experiencias de comercialización alternativas y demandas por la soberanía alimentaria

La dimensión socio-territorial resulta clave para pensar los procesos de exclusión social que rigen a los trabajadores del sector. El territorio es entendido

[...] como un espacio geográfico atravesado por relaciones sociales, políticas, culturales y económicas que es resignificado constantemente- a través de relatos míticos por los actores que habitan y practican ese espacio geográfico, configurando un escenario territorial en conflicto por la apropiación y reterritorialización del espacio y los recursos naturales que allí se encuentran (Wharen, 2011:13).

¹ El modelo de los agronegocios refiere a aquel llevado adelante por las grandes corporaciones multinacionales que controlan la producción, distribución y comercialización de alimentos a nivel mundial.

Así, el territorio es mucho más que un espacio geográfico, se encuentra cargado de sentidos y formas de ser rehabilitado y reconstruido. De este modo, esta multiplicidad de usos y sentidos del territorio se expresa -contingentemente- a modo de disputa territorial.

Como sostienen García Guerreiro y Wharen (2014), las estrategias campesinas y de productores familiares en ese marco se manifiestan como propuestas que incluyen visiones normativas diferentes –e incluso antagónicas– a las de la modernización excluyente que promueve el capitalismo hegemónico; estrategias que aparecen en forma de resistencias a partir de la recuperación de prácticas agroecológicas, el trabajo familiar, cooperativo y/o comunitario, o la producción de alimentos para los mercados locales. Estrategias y resistencias campesinas que se manifiestan también en la defensa no mercantil de la diversidad biológica y productiva a partir de las ferias de semillas; la lucha por la tierra; el rescate de saberes a partir de encuentros y talleres; el cuidado del ambiente mediante la utilización de tecnologías agroecológicas; la organización de la economía con base en las necesidades familiares y/o comunitarias, así como en la búsqueda de intercambios más justos entre productores y consumidores en el marco de redes de comercialización alternativa. Además, estas estrategias se expresan en torno a novedosas formas de articulación de las organizaciones campesinas que van tanto desde el nivel local, pasando por el regional y nacional, hasta el plano continental y global.

Zibechi (2017) plantea que no hay movimientos que tengan repertorios de acción exclusivos y que hayan dejado de lado otros modos de hacer, sino que registramos una ampliación del mismo concepto de lucha, en el que caben los modos tradicionales como otros realmente novedosos.

En consecuencia, las redes y experiencias de comercialización alternativa constituyeron una práctica novedosa tanto para productores como para consumidores, y una búsqueda por construir alternativas a los circuitos económicos tradicionales, en el marco de los cuales los agricultores y campesinos se ven permanentemente perjudicados. Se trata de la construcción de estructuras de conexión y circuitos comerciales que rompen con la situación de enfrentamiento tradicional entre producción y consumo que se ha desarrollado bajo el modelo urbano-industrial capitalista.

Estos circuitos representan un espacio de integración en el cual se hace significativo el intercambio directo entre el consumidor y el productor evitando las largas cadenas de intermediarios y habilitando cierto intercambio de saberes, reconocimiento mutuo y vínculos de confianza, que pueden redundar en la construcción de sociabilidades alternativas. De este modo, se ponen en juego y se desarrollan importantes procesos subjetivos que fortalecen, a partir del intercambio, una valoración diferente del trabajo campesino y de sus producciones,

así como una manera particular de producir y vincularse entre consumidores y productores (García Guerreiro y Wharen, 2014).

Las organizaciones que se forman en este contexto, tienen en común el establecimiento de una serie de pilares fundamentales que estructuran el horizonte de las acciones de la organización. Entre estos ejes de trabajo destacamos: soberanía alimentaria, agroecología, género, tierra, derechos de los pequeños productores y plano internacional. Estas dimensiones se encuentran articuladas entre sí y su abordaje requiere de un análisis e interpretación relacional.

La mayoría de estas organizaciones no surgen como espacios con objetivos directamente ligados a la agroecología. Sin embargo, la experiencia acumulada por los pequeños productores identificó la utilización de insumos dependientes de paquetes tecnológicos extranjeros y sujetos a los costes internacionales, como una problemática bisagra para el desarrollo del sector. La lectura realizada desde el marco comunitario que provee la organización permitió, además, observar la nocividad de estos productos para la salud de las familias agricultoras, que son expuestos a estas tecnologías sin mayor margen de acción, bajo la imposición de un modelo productivista y extractor.

La identificación de la problemática impulsó acciones en pos de “volver” a las formas de producción que antecedieron la expansión del uso de agroquímicos, a través de la aplicación de insumos naturales. Estas acciones deben comprenderse en el marco de la expansión y consolidación de la demanda de diversos actores por la soberanía alimentaria como alternativa a dichos modelos hegemónicos. Este nuevo modelo se basa en un movimiento a nivel internacional iniciado en la década del 90 por la Vía Campesina.

La Vía Campesina es un movimiento internacional de campesinos y trabajadores rurales. Fue fundada en 1993, y su instancia latinoamericana, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), constituida en 1994, son las principales organizaciones promotoras del principio de soberanía alimentaria. Está presente en más de ochenta países y fue la organización iniciadora del concepto de soberanía alimentaria como derecho de los pueblos a decidir las políticas agrarias y alimentarias. Para la Vía Campesina la soberanía alimentaria

[...] se presenta como un proceso de construcción de movimientos sociales y una forma de empoderar a las personas para organizar sus sociedades de tal forma que trascienda la visión neoliberal de un mundo de productos básicos, mercados y actores económicos egoístas. No existe ninguna solución a la infinidad de problemas complejos a los que nos enfrentamos en

el mundo actual. En su lugar, la Soberanía alimentaria es un proceso que se adapta a las personas y lugares en los que se pone en práctica. La Soberanía alimentaria significa solidaridad, no competición; también la construcción de un mundo más justo desde abajo hacia arriba (Coordinación Europea - Vía Campesina, 2018: 1).

El nuevo paradigma fue presentado en 1996 en la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) y marcó un camino hacia un sistema agropecuario que prioriza a campesinos, indígenas y la autodeterminación de los pueblos por sobre el modelo que privilegia a las grandes empresas de insumos, transporte y comercialización.

Soberanía alimentaria implica un sistema que da prioridad a las economías locales, la producción sana, el comercio justo, semillas criollas, políticas públicas para los sectores populares del campo, redistribución de tierras, acceso y gestión de territorios en manos de campesinos. El nuevo paradigma puso en jaque el discurso dominante de la misma FAO (que postula el principio de “seguridad alimentaria” sin cuestionar el modelo agropecuario global).

Dominguez (2015) sostiene que desde su aparición la consigna de soberanía alimentaria se ha instalado, paulatinamente, en diversos espacios de debate sobre la cuestión agroalimentaria, como contrapunto o bien complemento de la “seguridad alimentaria”. En general, tanto en los ámbitos de tratamiento estatal como académico, predomina el uso de la noción de seguridad alimentaria bajo el argumento de poseer un carácter explicativo en tanto categoría de análisis frente a la noción de soberanía alimentaria que tendría un carácter normativo, con capacidad propositiva más no analítica. Sin embargo, la soberanía alimentaria ha ido ganando atención en diversos espacios. Existen esfuerzos por definir la soberanía alimentaria en contraste con la seguridad alimentaria o bien como su precondition, y se la relaciona con la posibilidad del cumplimiento del derecho humano a la alimentación o del autoabastecimiento alimentario de los países. También ha despertado interés académico el rol que juega la soberanía alimentaria en la definición de políticas públicas de los países, así como en los debates y agendas de los organismos internacionales.

En este marco, la lucha por el acceso a la tierra es una de las reivindicaciones centrales de los movimientos que levantan la consigna de la soberanía alimentaria. En Argentina, se han presentado distintos proyectos de ley tanto al poder ejecutivo como legislativo de distintos niveles jurisdiccionales, con eje en la promoción de créditos blandos que habiliten el acceso a la tierra a los pequeños productores.

La propuesta de soberanía alimentaria está alineada con la justicia de género. Incorpora una agenda de reivindicación de la valoración de la función social histórica de las mujeres campesinas en torno al proceso creativo de la producción alimentaria; y una agenda de reparación en el ámbito de las relaciones sociales de género, que valora la participación femenina en la división del trabajo (León, 2007)².

4) Soberanía alimentaria y pandemia: el caso de la UTT

En el contexto de la pandemia de COVID-19, una de las organizaciones que se posicionó fuertemente como proveedoras de alimentos agroecológicos fue la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). La UTT es una de las organizaciones territoriales de inserción nacional más notoria de los últimos años en términos de masividad, relevancia política y participación en el espacio público. Su origen, en el año 2011, se remonta geográficamente al cinturón hortícola integrado por La Plata-Berazategui-Florencio Varela, en el que actualmente se concentra la mayor parte de sus integrantes. Este corredor se encuentra conformado por las localidades de Abasto, El Pato, Pereyra y Las Banderitas. Los antecedentes de la organización, sin embargo, deben rastrearse en los primeros agrupamientos alcanzados por jóvenes productores de la zona, formados en la militancia territorial entre fines de la década del 90 y la crisis del año 2001.

Este colectivo, integrado por trabajadores de la economía agrícola, reúne a más de 15 mil pequeños productores familiares, un tercio de los cuales provienen del cordón frutihortícola del Gran La Plata y el sur del Gran Buenos Aires. El resto (alrededor de 5 mil productores) se distribuyen entre los partidos del conurbano norte, Mar del Plata, Bahía Blanca, y las provincias de Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Río Negro, Salta, Tucumán, Corrientes, Córdoba, Neuquén, Mendoza, Entre Ríos, Misiones y Chubut (Página web UTT). Son, mayoritariamente, pequeños emprendimientos de agricultura familiar y campesina, y, mientras que algunos producen de forma agroecológica, otros realizan agricultura convencional y se encuentran en transición hacia la producción sin agroquímicos.

Más del 80 por ciento de los trabajadores de la agricultura familiar que integran la UTT, no son dueños de las tierras que cultivan, sino que arriendan la propiedad (Página/12, 13 de septiembre de 2017). La extensión de la tierra sobre la que trabajan las familias productoras

² Las propuestas con contenido de género más claras están asociadas al acceso equitativo a la tierra, crédito y capacitación, el que debiera estar orientado tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, Caro (2013) sostiene que aún están pendientes los debates en el plano de las relaciones privadas de género, de lo que ocurre “puertas adentro”, al involucramiento de los hombres en la responsabilidad de proveer alimentos para sus familias y comunidades, en definitiva, al papel de los hombres en la soberanía alimentaria.

de la zona, oscila entre las dos y cinco hectáreas. Por lo general, habitan en viviendas emplazadas en el mismo predio en que se encuentran los sembrados. Éstas suelen resultar precarias tanto en provisión de servicios como de habitabilidad (Gabrinetti y Burone, 2016).

Desde su conformación en el año 2011, la organización contó con altos niveles de participación y fuerte capacidad de movilización. Hacia mediados de la década, la UTT trazó vínculos con otras organizaciones representantes de trabajadores informales, hasta integrarse a la estructura de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en el año 2015.

Los pilares o ejes de trabajo fundamentales que estructuran el horizonte de las acciones de la organización, se organizan en las siguientes categorías: agroecología, género, tierra, derechos de los pequeños productores, consultorio jurídico y plano internacional. Los objetivos de la organización se constituyen, por tanto, en torno a las problemáticas que afectan a sus representados. De fuerte carácter gremial, los mismos se centran en impulsar el derecho de acceso a la tierra como principal reivindicación. Lo secundan, el reclamo por la promulgación de un abanico de legislaciones protectoras para el sector.

Sus repertorios de protesta en el período 2016-2019 (con especial énfasis en los años 2017 y 2018) contemplaron estrategias ligadas a la acción directa, como los “verdurazos”, “feriazos”, “tractorazos” y cortes de ruta (Bártola, 2018). Entre sus reclamos centrales incluyen la ley de acceso a la tierra, el rol del Estado como comprador de la producción de las familias de la organización, y el restablecimiento del Monotributo Social Agropecuario, derogado en 2018.³ Estas acciones se enmarcaron en un modelo específico basado en el achicamiento del andamiaje estatal, una mayor participación de capital extranjero en el país, y reformas tributarias y laborales basadas en el principio de flexibilización laboral.

³ El Monotributo Social Agropecuario fue creado en 2009 como mecanismo para garantizar el derecho de acceso a la salud a través de la obra social, contar con el aporte jubilatorio y la posibilidad de facturar en blanco, otorgándole un marco regulatorio y formalización al sector más relegado del campo. Se trata de un régimen que beneficia directamente a pequeños agricultores frutihortícolas (quinteros), agricultores familiares y campesinos sin tierra propia. La obra social del MSA le permitió el acceso directo al sistema de salud a 50 mil agricultores, que suman 110 mil contando a los adherentes. Sin el aporte de la cartera de Agroindustria, según las organizaciones de trabajadores de la tierra, cada productor deberá afrontar de su bolsillo un costo de 288 pesos para contar con la obra social. Para el Ministerio de Agroindustria, el desmantelamiento del sistema del MSA le implica un “ahorro” de 30 millones de pesos por mes, de acuerdo a la misma fuente. (Página/12, 14 de julio julio 2018)

De forma complementaria a estas expresiones, la organización buscó, sistemáticamente, entablar diálogo con las autoridades del gobierno, así como representantes legislativos de orden nacional y provincial.

4.1 Repertorios de acción de la UTT bajo un nuevo escenario: pandemia y cambios de coyuntura

La instauración de un nuevo gobierno en diciembre de 2019 (con una propuesta programática fuertemente enfrentada a la sostenida durante la etapa precedente), y la declaración de la pandemia de coronavirus por parte de la OMS en marzo de 2020 exigieron el reposicionamiento de los actores de la economía popular frente a los nuevos escenarios, así como la transformación de sus repertorios de acción.

Como hemos visto, el sector de la economía popular campesina se encontraba, hasta 2020, en situaciones de alta vulnerabilidad: presentaba dificultades para sostener la cadena de producción y comercialización, con baja capacidad de adquirir insumos importados y con escaso apoyo y/o financiamiento estatal. Estas condiciones, en un contexto adverso, en apariencia sólo podían tender a agudizarse.

Sin embargo, en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el rubro de los alimentos cobró una mayor relevancia dentro de otros consumos, especialmente durante los primeros meses de aislamiento. Durante este período, el cambio radical en el ritmo de la vida cotidiana habilitó la reflexión colectiva en torno a la producción y distribución de alimentos. Se visibiliza, con especial nitidez, la distinción entre los distintos actores que intervienen en los procesos productivos: quiénes producen alimentos transgénicos para el mercado global de commodities y quiénes –desde una economía de subsistencia- producen los alimentos que consume la mayor parte de la población del país (Wahren, 2020).

La crisis desatada por el coronavirus -corolario, en Argentina, de un ciclo neoliberal de cuatro años- dejó al descubierto la especulación e intermediación en la oferta de alimentos propiciadas por la concentración del “agronegocio” y de las cadenas de acopio y distribución. De este modo la pandemia evidenció, como pocas veces en la historia, el rol estratégico de los circuitos de producción y distribución de alimentos, y reinstaló en la agenda pública temáticas históricamente abordadas por las luchas de los movimientos de la agricultura campesina (Stein, 2020).

La atención de distintos sectores de la ciudadanía se posó entonces sobre la provisión, por parte del entramado asociativo de la economía popular, de bienes y servicios considerados estratégicos en el marco de la crisis sanitaria (Wharen, 2020).

En este contexto, la UTT no sólo debió reconfigurar su gramática movimentista y posponer acciones de visibilización de sus demandas sino, fundamentalmente desempeñar un nuevo rol en tanto actores centrales en la provisión y distribución de alimentos entre la población y, particularmente, entre los territorios más urgidos.

Entre las principales estrategias que la organización se dio durante 2020, se cuenta la de extender la modalidad de “compre local”⁴; la puesta en marcha de las tiendas solidarias; la donación de grandes volúmenes de alimentos a comedores populares; la apertura de nuevos locales y nodos de distribución; y el desarrollo de una ingeniería que permitiera ampliar la distribución y comercialización de bolsones con productos agroecológicos en todo el país.

Durante 2020, la venta de alimentos distribuidos a través de los esquemas de comercialización de la UTT aumentó exponencialmente en todo el país. Para hacer frente a la creciente demanda, la organización inauguró el primer mayorista de alimentos cooperativos en Avellaneda, un almacén de campo en la Colonia agroecológica que posee en Luján y un almacén en El Hoyo, Provincia de Chubut. Paralelamente, el sistema de compras comunitarias o nodos de consumo (efectivo para evitar aglomeraciones) se desarrolló notoriamente en los principales centros urbanos.

Paralizada en su capacidad de movilización directa, este reposicionamiento le permitió a la UTT inaugurar un repertorio de acción pública desacoplado de las prácticas de protesta sostenidas durante la etapa precedente. Este conjunto de acciones sostuvo la centralidad del sector en la escena pública y le brindó la posibilidad de “instalar” masivamente las temáticas que nutren sus principales consignas/banderas, como la necesaria transformación del esquema de provisión de alimentos, la concentración de los sectores productivos hegemónicos, la especulación e intermediación en la oferta de alimentos, y el rol estratégico de los circuitos alternativos de producción.

Entre las principales dificultades que debió enfrentar/sortear la organización una vez declarada la emergencia -aún en medio de la incertidumbre generalizada- y durante los períodos de restricciones más estrictas, se cuentan los obstáculos para la distribución y comercialización directa de la producción debido a la suspensión de ferias y mercados; y las dificultades para sostener la entrega de bolsones a los consumidores, atento a la ausencia de mecanismos afianzados de reserva/encargo virtual de bolsones y de reparto domiciliario de mercadería (Hintze y Deux Marzi, 2020).

⁴ Esta modalidad promueve el consumo de productos oriundos de las mismas localidades (o sus proximidades), con el fin de favorecer la economía de cercanías y el sostenimiento de las fuentes laborales de las familias campesinas.

Asimismo, la UTT debió desarrollar dispositivos de contención y sostenimiento de las familias productoras, dada la fuerte implicancia de las medidas de aislamiento sobre sus hogares. Puesto que la mayoría de sus integrantes viven de los ingresos económicos diarios y no cuentan con ahorros que garanticen su supervivencia, la crisis no sólo expuso la salud de los/as trabajadores/as sino también sus posibilidades de garantizar la alimentación propia y de sus familias (Molina y Sayago Peralta, 2020). La crisis agudizó también las situaciones de conflictos intra-familiares y violencia de género. Para esta problemática y acorde con sus líneas de acción, la UTT inauguró a fines de 2020 el primer refugio para mujeres campesinas víctimas de violencia de género, situado en Lisandro Olmos, cordón hortícola de La Plata (Telam, 11/10/2020).

Si se realiza un análisis sectorial, se observa que el rubro más golpeado por la pandemia y las restricciones fue el florícola y viverista del cordón verde del Gran La Plata. A diferencia de la frutihorticultura, que con dificultades y protocolos sanitarios continuó trabajando, para las actividades ligadas a la producción de plantas y flores se produjo un cierre masivo de los mercados de comercialización (Sitio web UTT).

La resolución de estas problemáticas no sólo demandó tiempo y creatividad, sino intensificar el diálogo entre los distintos actores, así como perfeccionar los mecanismos de articulación de los circuitos socio-productivos existentes. Para el caso de las actividades más afectadas, la UTT logró establecer un sistema de microcrédito que permitió su reconversión hacia la horticultura agroecológica, acompañado de capacitaciones brindadas desde el Consultorio Técnico Popular (Co.Te.Po) perteneciente a la misma organización. El crédito fue otorgado con fondos de la organización y pagado en bolsones de verduras destinados a comercializarse en ferias y mercados de la UTT (Sitio web UTT).

En el plano legislativo, la UTT continuó durante la pandemia, dando impulso al tratamiento de distintos proyectos de ley, como el mentado proyecto de Acceso a la Tierra, que tiene entre sus objetivos la creación de un Procrear Rural que facilite el acceso a la tierra a los pequeños productores.

La articulación entre el Estado y los movimientos sociales rurales tuvo otro gran acontecimiento que merece ser resaltado ya que resulta novedoso para las dinámicas y repertorios de estas organizaciones. Con el cambio de gestión presidencial, Nahuel Levaggi, uno de los principales referentes de la UTT, asumió la presidencia del Mercado Central de Buenos Aires. Con esta nueva participación institucional del principal mercado de abasto frutihortícola de la Argentina estas organizaciones pasaron a tener bajo su órbita la comercialización de gran parte de los alimentos que se distribuyen en la región del AMBA

abarcando a más de 14 millones de personas; que provienen tanto de los cinturones productivos de la provincia de Buenos Aires, como del resto del país. Lo más sobresaliente de esta experiencia es que se trata de la primera vez que un movimiento social rural tiene la gestión formal de un organismo estatal, central en la regulación de la rama de producción específica, en este caso el complejo fruti-hortícola (Wahren, 2020).

La decisión orgánica de aceptar la Dirección del Mercado Central por parte de la UTT, enfrenta a la organización a una tensión sostenida: la de responder a los intereses y reclamos de sus representados; la de pretender sostener cierta autonomía del gobierno y el poder estatal; y la de ejercer la dirección de una institución compleja, atravesada por la puja de múltiples actores (sociales, económicos, políticos; productores, acopiadores, comercializadores mayoristas y minoristas) (Wharen, 2020).

En ese marco y en un contexto como el actual -signado por la crisis sanitaria y económica- se identifican dos desafíos centrales para la organización. Por un lado, el control de precios de los alimentos, plasmado en la gestión del acuerdo denominado “Compromiso Social de Abastecimiento”, destinado a regular los precios de distintos productos de la canasta básica alimenticia semana a semana con resultados dispares. Por otro lado, la posibilidad de impulsar desde el Mercado Central la producción de alimentos agroecológicos, tanto por parte de los productores tanto de la UTT como de otros movimientos sociales rurales, ampliando así los espacios de comercialización de las agriculturas alternativas (Wharen, 2020). A tal fin, desde la Dirección del Mercado Central se han desarrollado distintas iniciativas, entre las que destacan los programas de

[...] fomento de la agroecología y la compra estatal de alimentos a pequeños productores, la creación del Área de Alimentación Sana, Segura y Soberana del Mercado Central, convenios con el INTA, el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y otros organismos públicos nacionales y provinciales, un esquema de donación de alimentos frescos a comedores populares que se amplió sustancialmente con la nueva gestión y otra iniciativa de comercialización de bolsones de comida a precios populares en barriadas del conurbano bonaerense (Wharen, 2020).

Sin embargo, la incidencia de estas acciones sobre las desventajas estructurales que sufren los pequeños productores de la fruti-horticultura, no ha llegado aún a reflejarse en las cadenas de producción y comercialización que involucra a las familias campesinas. El gran desafío es, entonces, aprovechar la gestión de este organismo regulados, como plataforma desde la que impulsar la transformación -al menos parcial- de las dinámicas del agronegocio en el sector

frutihortícola, y acompañar la ampliación de los modelos alternativos de producción (Wharen, 2020).

5) Reflexiones finales

En Argentina, en paralelo a los cambios y transformaciones que atravesó el mundo agrario en las últimas décadas, se han ido conformando novedosas acciones colectivas y coordinando estrategias de lucha por parte de comunidades y organizaciones campesinas e indígenas en diferentes puntos del país. Entre las nuevas formas de conflictividad emergentes, se destacan experiencias sociopolíticas de productores familiares que -nucleados en distintas formas de organización- desafían el uso de la tierra y la construcción hegemónica del territorio. Desde hace ya varios años, las acciones impulsadas por estos nuevos colectivos se han convertido en tema de interés y trascendencia, tanto para la opinión pública como para las ciencias sociales en particular.

Las redes y experiencias de comercialización alternativa constituyeron una práctica novedosa tanto para productores como para consumidores, y una búsqueda por construir alternativas a los circuitos económicos tradicionales. Se trata de la construcción de estructuras de conexión y circuitos comerciales que rompen con la situación de enfrentamiento tradicional entre producción y consumo que se ha desarrollado bajo el modelo urbano-industrial capitalista.

Si hasta el año 2019 la Argentina se encontraba atravesando una de las peores crisis económicas de su historia, el COVID-19 acrecentó los efectos de dicha situación. En ese momento, al igual que en otros contextos de emergencia, las organizaciones sociales de la economía social y solidaria pasaron a adoptar un lugar fundamental, en tanto actores con capacidad de dar respuesta a una parte de las necesidades básicas de la comunidad.

En este marco, esta investigación tuvo por objetivo indagar las transformaciones acaecidas en las formas de producción y comercialización de los movimientos sociales rurales en las últimas décadas en Argentina, algunas de las cuales se vieron acentuadas durante la pandemia. Para ello, se tuvieron en cuenta los procesos de territorialización de estos movimientos, la demanda por una ley de tierras y la instalación de la soberanía alimentaria como estandarte de un modelo alternativo de producción. Para dar cuenta de esto, se tomó como caso emblemático de estudio a la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), con énfasis en las prácticas y repertorios de acción desarrollados por esta organización entre marzo y diciembre de 2020, período caracterizado por fuertes restricciones a la circulación de personas.

Durante esta etapa la UTT no sólo debió reconfigurar su gramática movimentista y posponer acciones de visibilización de sus demandas sino, centralmente, desempeñar un nuevo papel en tanto actores centrales en la provisión y distribución de alimentos para la población. Esto permitió a la organización jerarquizar su labor de cara a la sociedad, ya que dio cuenta, públicamente, de sus condiciones en tanto proveedora de alimentos de los hogares argentinos. Este compromiso comunitario asumido por la UTT en tiempos de escasez y acaparamiento por parte de los grandes intermediarios (como ocurrió durante las primeras semanas de ASPO) no se cristaliza, sino que se proyecta como un aporte a largo plazo y se consolida a partir de la extensión de la modalidad de “compre local”, las tiendas solidarias, y el incremento en la distribución de bolsones con productos agroecológicos a nuevas familias, entre otros. En este sentido, sin que se trate de unidades organizacionales novedosas, lo que caracterizamos como emergente son los propios circuitos socioproductivos que en ese contexto se despliegan más articulados que antes.

La experiencia histórica del movimiento de la agricultura familiar, campesina e indígena, junto a las entidades de la economía social y los sujetos y organizaciones de la economía popular -como lo es la UTT- es densa y llena de aprendizajes. Es preciso tomarlos como enseñanza para rediseñar las políticas públicas que acompañen los intereses, y anhelos de las comunidades. En este punto, la intervención del Estado se prefigura como central en dicha articulación; ya sea que el mismo asuma el rol de comprador, o bien que intervenga para acercar a productores y consumidores en el marco de una política pública alimentaria y de desarrollo local.

Si cabe, antes de finalizar, una última reflexión sobre la crisis sanitaria, es su incidencia en la emergencia y visibilización de procesos colectivos de organización y solidaridad, redes de contención y cuidado, desplegados como estrategias de supervivencia y con un papel fundamental frente a la pandemia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez, S., Dagnino, E. y Escobar, A., (2001). "Introducción: Lo cultural y lo político en los movimientos sociales latinoamericanos", en Álvarez, S., Dagnino, E. y Escobar, A (ed.), Política cultural y cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos (pp. 17-48). Bogotá: Taurus – ICANH.
- Attademo, S.; Waisman, M.; Rispoli, M.; Lucero, P., (noviembre, 2013). Persistencias y reestructuraciones en la producción familiar. VII Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.9420/ev.9420.pdf
- Bártola, D., (2018). Más allá de la supervivencia: La participación de pequeños productores del Cordón Hortícola del Gran La Plata en asociaciones y cooperativas como estrategias para la reproducción social en el período 2010-2017. Tesis de grado, Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1485/te.1485.pdf>.
- Bordes, R. (2020). "Comemos a precio dólar: hay que transformar la matriz productiva". BORDES, (18), 217-222. Recuperado de: <https://publicaciones.unpaz.edu.ar/OJS/index.php/bordes/article/view/826>
- Caro, P. (2013). Soberanía alimentaria: Aproximaciones a un debate sobre alternativas de desarrollo y derecho de las mujeres. En El Libro abierto de la Vía Campesina: celebrando 20 años de luchas y esperanza. Disponible en: <https://viacampesina.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2013/05/ES-05.pdf>
- Domínguez, D. (2015). La Soberanía Alimentaria como enfoque crítico y orientación alternativa del sistema agroalimentario global. Pensamiento Americano, 8(15), 146-175.
- Ferraris, G.; Bravo, M., 2014. Organizaciones de productores hortícolas del Cinturón Verde de La Plata. VIII Jornadas de Sociología de la UNLP, Ensenada, Argentina. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.4751/ev.4751.pdf.
- García Guerreiro, L. y Wahren, J. (2016). Seguridad Alimentaria vs. Soberanía Alimentaria: La cuestión alimentaria y el modelo del agronegocio en la Argentina, en Trabajo y Sociedad N.º 26, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Santiago del Estero. Disponible en:

<https://www.unse.edu.ar/trabajosociedad/26%20WAHREN%20Y%20GERREIRO%20Soberania%20Alimentaria.pdf>

- García Guerreiro, L. y Wahren, J. (2014). Campesinado, territorios en disputa y nuevas estrategias de comercialización de la producción campesina en Argentina, en Veredas. Revista del pensamiento sociológico, No. 28, El desarrollo rural en América Latina y el Caribe. Universidad Autónoma de México-Xochimilco. Disponible en: <https://veredasojs.xoc.uam.mx/index.php/veredas/article/view/336>
- Gabrinetti, M. A., Burone, E., y Schiavi, M. D. (2016). Trabajo agrario en el gran La Plata: condiciones de vida, trabajo y nuevos desafíos desde las políticas públicas en el contexto actual. III Foro Latinoamericano de Trabajo Social (La Plata, Argentina, 2016).
- Hintze, S., y Deux Marzi, M. V. (2020) La economía popular, social y solidaria en la encrucijada COVID-19. En Observatorio del Conurbano Bonaerense (Ed.), 2da serie especial Covid-19. AMBA resiste. Actores territoriales y políticas públicas. Universidad Nacional de General Sarmiento.
- León, I. (2008). “Gestoras de Soberanía Alimentaria”. Paper publicado el 22 /2 /2008 en www.fedaeps.org
- Molina, A. y Sagayo Peralta, E. G. (2020). Experiencias de la economía popular en el contexto de la pandemia COVID-19 en Argentina. Abordaje de casos en Córdoba Capital y la ciudad de Santiago del Estero, ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Revista Idelcoop, No 231, ISSN 0327 1919. P. 145-176/ Sección: Experiencias y Prácticas
- Stein, N. (2020) Economía social y estado para enfrentar la emergencia alimentaria y la pandemia. La co-gestión de los circuitos de producción y distribución de alimentos. En Álvarez, J.F. & Marcuello, C. (Dir.) Experiencias Emergentes de la Economía Social, OIBESCOOP, pp. 344-372
- Revilla Blanco, M, (2005). “Ciudadanía y acción colectiva en América Latina. Tendencias recientes”, en Estudios Políticos, No. 27, pp. 27-41, Medellín.
- Svampa, M. (2019). Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias. Fundación CALAS.

Vía Campesina Internacional. ¡Soberanía Alimentaria YA! Una guía detallada. Páginas 3-19.
Disponible en: <https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/Food-Sovereignty-a-guide-ES-version-low-res.pdf>

Wahren, J. (2020) "Pandemia y alimentos en Argentina" en Revista Bordes – N° XVIII, agosto-octubre, Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), José C. Paz. Pp. 207-216.
ISSN: 2524-9290. Disponible en: <http://revistabordes.unpaz.edu.ar/alimento-tierra-e-intercambio/>

Wahren, J. (2011). "Territorios Insurgentes: La dimensión territorial en los movimientos sociales de América Latina". En IX Jornadas de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 8 al 12 de agosto de 2011.

Zibechi, R. (2017). Movimientos Sociales en América Latina. El "mundo otro" en movimiento. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.

Artículos periodísticos

López Gijsberts, D. (2020). Mujeres campesinas organizan un refugio para compañeras en situación de violencia, en Agencia de Noticias TELAM, La Plata, 11/10/2020.
Recuperado de: <https://www.telam.com.ar/notas/202010/523644-mujeres-campesinas-organizan-un-refugio-para-companeras-en-situacion-de-violencia.html>

Sitios web

Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) (7 de mayo de 2020). La UTT implementa un sistema de microcréditos para que los floricultores en crisis produzcan verdura agroecológica.
Recuperado de: <https://uniondetrabajadoresdelatierra.com.ar/>